



- DOSSIER
- GUÍA DIDÁCTICA
- ACTIVIDADES

Derechos muy torcidos



Hay muchas maneras de matar.
Pueden meterte un cuchillo en el
vientre.
Quitarte el pan.
No curarte de una enfermedad.
Meterte en una mala vivienda.
Empujarte hasta el suicidio.
Torturarte hasta la muerte por
medio del trabajo.
Llevarte a la guerra, etc.
Solo pocas de estas cosas están
prohibidas en nuestro Estado.

Bertolt Brecht

Las condiciones de vida han empeorado de forma generalizada desde el comienzo de la crisis, especialmente a partir de 2010. Así se desprende del análisis que hace el Barómetro Social de España (BSE), con datos de once ámbitos: renta y patrimonio, empleo, salud, educación, vivienda, protección social, seguridad y justicia, medio ambiente, participación, relaciones internacionales y género.

Los datos avalan la experiencia de la ciudadanía de a pie: vivimos peor no solo porque tenemos menos dinero, sino porque vemos como una mayoría que no para de crecer no podemos hacer frente a nece-

sidades elementales. Los recortes que nos presentan como imprescindibles “para salir de la crisis” no afectan a partidas presupuestarias, sino a derechos básicos.

¿Pueden subordinarse nuestros derechos a los intereses de las oligarquías? ¿Puede ser la crisis excusa para que derechos básicos queden en papel mojado? ¿Vivimos en una democracia (gobierno del pueblo) o en una plutocracia (gobierno de los ricos)? Estas medidas tal vez nos saquen de la crisis, pero habiendo dejado atrás los derechos que nos corresponden como seres humanos, como ciudadanía.

Este *Global* se propone ayudar a encontrar respuestas a estas preguntas, con datos y análisis, poniendo sobre la mesa juntos datos que suelen llegarnos –si nos llegan– de forma fragmentaria y sin contextualizar.

sumario

- p. 02 1. Las personas tenemos derechos
- p. 10 2. Auge y caída del Estado del bienestar
- p. 11 3. Cuando los derechos se tuercen
- p. 20 4. Consecuencias de la pérdida de DDSS
- p. 24 5. Defensa de los DDSS y construcción de ciudadanía
- p. 27 6. Sí se puede. Alternativas en marcha



OXFAM Intermón



1. Las personas tenemos derechos



Pintura: Eugène Delacroix

Se considera un derecho lo que se concede o reconoce a un sujeto, en función de circunstancias muy distintas: el nacimiento, la herencia, la vecindad, la conquista, el trabajo, etc. En el caso de los derechos humanos, la circunstancia es precisamente esa: ser una persona. Son, pues, inherentes a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo, independientemente de cualquier rasgo diferencial: nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Puesto que emanan de la dignidad de la persona, son **universales** (nadie está excluido), **inalienables** (a nadie se le pueden arrebatar), **indivisibles**, **interdependientes**, **interrelacionados** (no son parciales ni pueden ser aplicados aisladamente: ningún derecho es más importante que otro) y **no condicionados** (no se puede exigir ninguna clase de contrapartida). El deber correspondiente a estos derechos es el respeto y la garantía a los derechos de las otras personas.

El contenido de los derechos humanos está estrechamente vinculado

a las condiciones que permiten a la persona su realización; es decir, lo que garantiza una vida digna. Puede decirse en este sentido que corresponden a las necesidades básicas de los diferentes ámbitos en que consiste ser humano: alimento, seguridad, libertad, afecto, etc.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de Naciones Unidas (París, 10 de diciembre de 1948) es la culminación de un largo proceso en el que la humanidad ha ido cobrando conciencia de su dignidad e igualdad, a la vez que un punto de partida para ir concretando y desglosando estos derechos.

En culturas milenarias se encuentran referencias que pueden considerarse precedentes, como por ejemplo el código de Hammurabi (Babilonia, 1700 a. C.), Pericles (Grecia, siglo V a. C.) o los edictos del rey Asoka (India, siglo III a. C.). Sin embargo, a medida que se fragua la modernidad es cuando va asentándose la convicción de que las personas somos sujetos de derechos que todo poder ha de respetar porque

están por encima de la voluntad de cualquier tirano. Los derechos humanos, tal como hoy los entendemos, son hijos de la Ilustración y las revoluciones burguesas que proclaman que nadie es más ni mejor que nadie porque haya nacido en una u otra familia. A la aristocracia ("gobierno de los mejores") de la sangre se opone la aristocracia de la humanidad compartida. Es el final de las monarquías absolutas y el nacimiento de las democracias burguesas.

La primera formulación de la época moderna es de 1776 y forma parte de la Declaración de Independencia de Estados Unidos; en 1789, la Revolución Francesa proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la más conocida, que recoge el derecho a distintos aspectos de lo que hoy consideramos ejercicio de la ciudadanía política: sufragio, libertad de expresión, igualdad legal, etc. Es necesario aclarar que ambas son hijas de su tiempo y que, efectivamente, los derechos que reconoce son del **hombre** y del ciudadano; es decir, privativos de los varones.



A lo largo del siglo XIX, la burguesía, la clase triunfante de las revoluciones liberales, asentó un sistema político-económico que favorecía sus intereses de clase (sistema liberal capitalista). Al estar su riqueza basada en la explotación de la mano de obra, la clase trabajadora empieza a tomar conciencia de su situación subordinada. Ciertos movimientos políticos y sociales (socialismo, en sus vertientes reformistas y revolucionarias, anarquismo, feminismo, etc.) intentan subvertir esta situación. Algunos de estos discursos se articularon en el poder (socialdemocracia) y otros consiguieron ciertos éxitos a través de la movilización (sufragio universal, jornada laboral de ocho horas, etc.).

El comienzo del siglo XX registra dos hechos decisivos, de signo contrario:

- Triunfo de la Revolución Rusa, en la que por primera vez tiene éxito un proceso político transformador que propone cambiar el sistema económico (capitalismo) y político (liberal).
- Y, como respuesta, el surgimiento de posturas y movimientos ultranacionalistas que desembocaron en el fascismo, cuyo objetivo era frenar por cualquier medio, incluida la violencia, los principios de igualdad económica y social que las ideologías socialistas (y el propio liberalismo) habían planteado. De este modo, el fascismo articulado en el poder (Italia, Alemania, España) restringía gran parte de los derechos individuales y colectivos por creer que amenazaban la estabilidad y el orden social.

El siglo se había estrenado con una sanguinaria guerra (la primera considerada mundial), que produjo ocho millones de muertos y seis millones de discapacitados. Después vinieron los regímenes totalitarios surgidos en los años 20 y 30, que provocaron uno de los mayores horrores de la historia, seguidos de la Segunda Guerra Mundial. Si el espanto de la primera gran gue-

rra dio nacimiento a la Sociedad de Naciones como un intento de no repetir errores, tras la segunda surge la ONU como un grito de “¡Nunca más!”. Los juicios de Nuremberg y Tokio contra altos responsables nazis y japoneses, acusados de crímenes de guerra y genocidios, mostraban la necesidad de establecer garantías de respeto a los seres humanos, intentando un consenso universal sobre una serie de derechos explicitados.

En este contexto, se produce la Declaración, fruto del convencimiento de que, como proclama el preámbulo, “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

Generaciones de derechos humanos

A partir del momento fundacional en que se proclama solemnemente que todos los seres humanos, por el hecho de serlo, somos sujetos de una serie de derechos, se inició un proceso a lo largo del cual estos se han ido desarrollando y concretan-

do. Esta evolución, aún en marcha, da lugar a la organización de los derechos humanos en tres generaciones (concebida por primera vez por Karel Vašák en 1979), asociada cada una a uno de los grandes valores proclamados en la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad.

Los derechos de primera generación son los civiles y políticos, vinculados con el principio de **libertad**. Están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Los de segunda generación son los económicos, sociales y culturales, y corresponden al principio de **igualdad**. Están recogidos en el **Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales**, un tratado multilateral adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966.

La tercera generación de derechos, surgida en los años 80 y formada por los llamados derechos de los pueblos, se relaciona con la **solidaridad**. Recoge derechos heterogéneos como el derecho a la paz, a la calidad de vida, etc.



Foto: Freshwater



Salario ciudadano

Desde hace ya un tiempo, crece la reivindicación de que entre los derechos de la ciudadanía se reconozca el de percibir unos ingresos que garanticen el acceso a medios dignos de vida. Existen varias formulaciones, con contenidos diferentes, pero con el objetivo común de reducir las desigualdades y de participar en los bienes comunes.

La **renta básica universal**, según la Red Renta Básica, es un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva.

La **renta garantizada de ciudadanía** es un derecho universal de todos los ciudadanos y ciudadanas, subjetivo, de carácter individual, vinculado a la situación económica de la persona, y en su caso, del núcleo de convivencia, no condicionado a disponibilidades presupuestarias ni a la obligación de participar en acciones de inserción social y laboral. Su objetivo es garantizar que nadie esté por debajo del límite de la pobreza.

Derechos económicos, sociales y culturales

Los **derechos económicos, sociales y culturales (DESC)** ya estaban implícitos en la Declaración Universal de 1948, en tanto que reconoce que todas las personas son sujetos de derechos, en igualdad, y que estos constituyen las condiciones que garantizan una vida digna.

El Artículo 3 de la Declaración establece el derecho a la vida. Era cuestión de tiempo que las condiciones que la garantizan también fueran reconocidas como derechos, puesto que esta no es posible sin las condiciones materiales de existencia. Esto ocurre en 1966, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas adopta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que entró en vigor el 3 de enero de 1976.

Tras la Segunda Guerra Mundial, se dan las condiciones para lo que se denomina el “pacto keynesiano”, en referencia al economista británico John Maynard Keynes, que defiende la intervención de los poderes públicos en la economía para corregir desigualdades producidas por el sistema. Esto significa un freno a la ley fundamental del liberalismo econó-

mico –*laissez faire, laissez passer*–, con un Estado fuerte que asume la responsabilidad de compensar y corregir las desigualdades alimentadas por la economía de mercado, mediante políticas económicas y fiscales.

A esto se suma el auge que desde el siglo XIX va tomando el movimiento obrero y las consiguientes conquistas sociales, así como el miedo al comunismo de muchos gobiernos occidentales (tras la Segunda Guerra Mundial, se abrió el periodo de la Guerra Fría, con dos bloques enfrentados que se miran con temor y recelo y que rivalizan por atraer a su área de influencia el mundo entero).

El Estado se convierte en una especie de contrapoder, legitimado por la soberanía nacional, que, mediante un sistema fiscal de tipo redistributivo y políticas sociales y de pleno empleo, avanzaba hacia la aspiración histórica de la equidad social y hacia un modelo político basado en derechos sociales considerados universales.

Todo ello va fraguando el Estado del bienestar. Puede decirse que los DESC son los propios del Estado del bienestar y del Estado social de derecho, que aparece históricamente como superación del Estado de derecho liberal.

Según el Pacto Internacional, los DESC son:

- Nivel de vida saludable (incluye alimentación, vestido y vivienda)
- Salud
- Educación
- Trabajo (incluye los derechos sindicales)
- Seguridad social
- Participación en la vida cultural (cultura, investigación, etc.)

La aplicación de los DESC ha sido más teórica que efectiva (y más reactiva que propositiva), más aún en los contextos de crisis (derecho al trabajo, derecho a la vivienda, etc.), en los que simplemente se han vulnerado de forma reiterada.

El problema de fondo de estos derechos es que sobrepasan el ámbito de la **libertad** y abordan el concepto de **igualdad**. En una sociedad capitalista es imposible una auténtica igualdad porque el propio sistema crece a base de desigualdad.



Foto: World Bank Photo Collection



¿Quién es responsable de garantizarlos?

Se considera que un derecho está garantizado cuando se cumplen estas seis condiciones:

- Disponibilidad: se vulnera el derecho a la educación si no disponemos de una escuela.
- Accesibilidad: si la escuela está demasiado lejos, o es demasiado cara, o está al alcance solo de un determinado perfil de gente.
- Aceptabilidad: debe ser socialmente y comunitariamente acep-

tada; por ejemplo, respetando la lengua autóctona.

- Sostenibilidad: la continuidad debe estar garantizada.
- Calidad: no basta con que la escuela exista; ha de impartir educación de calidad.
- Participación: los titulares de derechos deben poder participar en la toma de decisiones que afectan a la prestación de estos servicios y derechos.

Corresponde a los Estados garantizar el ejercicio de los derechos de sus ciudadanos. Actualmente,

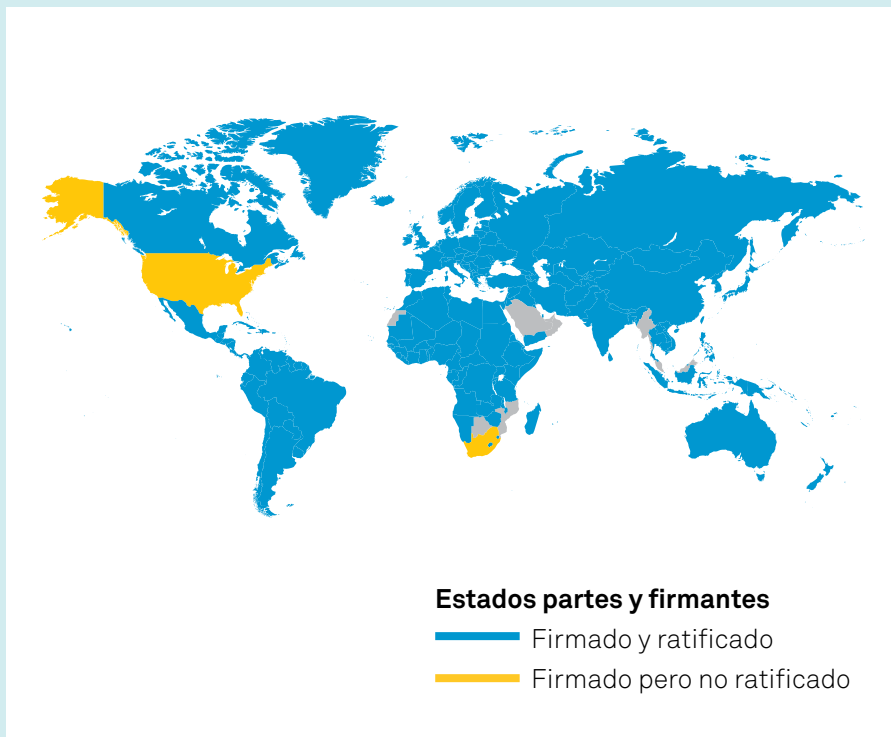
todos los Estados han ratificado al menos uno de los principales tratados de derechos humanos, y el 80% cuatro o más, lo que significa que se comprometen a establecer obligaciones jurídicas, a cumplirlas y a hacerlas cumplir. Además, algunas normas fundamentales de derechos humanos gozan de protección universal en virtud del derecho internacional consuetudinario.

¿Cómo se garantizan? Con leyes que confieran respaldo jurídico, y con recursos económicos obtenidos mediante una fiscalidad justa.

Ciudadanía global, compromiso global

El **Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales** fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. En diciembre de 2008 formaban parte de él 160 países y otros seis lo habían firmado, pero aún no ratificado. Con posterioridad, se ha adherido Palestina y lo ha ratificado el pequeño Estado insular de Palaos. Teniendo en cuenta que actualmente existen 194 países reconocidos, no es una proporción demasiado mala.

Lo que sí es malo es que ni firmas ni ratificaciones garantizan que estos derechos se respeten en la práctica. Puede decirse que en ninguno de los países firmantes la ciudadanía disfruta por completo de ellos. El 50% de los trabajadores de todo el mundo gana menos de dos dólares diarios y no tiene ningún tipo de contrato ni de protección social. Más de 1.100 millones de personas pasan habitualmente hambre y casi 2.000 millones viven en situación de extrema pobreza. La ONU informa de que 300.000 personas no tienen una casa donde vivir. Hay



58 millones de niños y niñas sin escolarizar, según la UNESCO, de los que cerca de un 43% (15 millones de niñas y 10 millones de niños) puede que nunca lleguen a poner un pie en una clase si la tendencia actual continúa.

Si en muchos países el Estado del bienestar está perdiendo terreno, en otros muchos nunca hizo acto de presencia. ¿Servirá esto de consue-

lo para la ciudadanía que aún gozamos de algunos restos? Si queremos un mundo regido por los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que comienza proclamando la igualdad de todas las personas, debemos trabajar porque estos derechos se universalicen en la práctica. La vulneración de los derechos de una sola persona nos vulnera a todas. La ciudadanía global exige compromiso global.



Leyes

¿Cómo se explica que, no obstante, se respeten tan poco? El problema es que los derechos económicos, sociales y culturales reciben un tratamiento muy diferente a los civiles en las constituciones de los Estados. A diferencia de los de primera generación, que son “de obligado cumplimiento” (lo que no significa que se respeten completamente: según un informe aparecido en diciembre de 2013, 180 países los vulneran de alguna manera), los DESC quedan como aspiraciones bastante indeterminadas. Por ejemplo, en la Constitución española, los derechos civiles (derecho al voto, libertad de expresión, etc.) aparecen en el capítulo de los derechos y libertades que los poderes públicos tienen obligación de garantizar; si una ley de rango inferior entra en contradicción, puede ser denunciada ante el Tribunal Constitucional. Los derechos sociales están recogidos, sin embargo, en el de los “Principios rectores de la política social y económica”, que el legislador debe (no es obligatorio) tener en cuenta, pero sin garantías jurídicas. Es decir, la ciudadanía no puede exigir tutela judicial para reclamar un empleo, una vivienda, un ambulatorio o un colegio.

También existe un conflicto epistemológico que la derecha ha ma-

nejado bastante bien: la supuesta dicotomía entre libertad e igualdad. Así, cuando algunos sectores denuncian la vulneración de un DESC (por ejemplo, el derecho a la vivienda), los gobiernos responden que defender este derecho es ir en contra de la libertad (en este caso empresarial). Algo parecido pasa con el derecho al trabajo.

Así, se puede dar el caso –que se da– de que haya leyes que no solo no garantizan derechos, sino que facilitan y legalizan su vulneración. Por ejemplo, el derecho a la vivienda.

- Ley del suelo (2002): promulgada durante el Gobierno de Aznar, viene a decir que todo suelo no calificado como no urbanizable es urbanizable, abriendo la puerta a especular con un derecho básico. Su repercusión en la burbuja inmobiliaria ha sido enorme.
- Ley hipotecaria (1947): no está pensada como medio de acceso a la vivienda, sino para personas con muchos recursos y conocimientos específicos. Condena a la exclusión a grandes colectivos con medidas como los abusivos intereses de demora: en ocasiones, un solo día de demora supone un incremento de la deuda de 100 €. A esto se añaden los aspectos fiscales: el Gobierno se lucra con las ejecuciones hipotecarias.

Por lo tanto, no podemos esperar que nuestros DESC se respeten hasta que no queden articulados en constituciones de forma clara, aunque acudir a instancias internacionales (como han hecho algunos abogados con temas de desalojos) haya permitido algún tímido éxito.

Recursos económicos



Foto: Portal del Sur

Los impuestos son necesarios para financiar unas políticas y unos servicios públicos de calidad que garanticen el ejercicio de los derechos ciudadanos, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Para que así suceda, es imprescindible que los impuestos sean equitativos (cada cual contribuye en función de su capacidad), que las instituciones y los procedimientos sean transparentes, y que estos se empleen bien, con eficiencia, calidad y transparencia, y que, cuando se malgastan, haya mecanismos que lo corrijan con contundencia.

El sistema tributario sirve para recaudar y para distribuir, y no es inocente: según se oriente, puede, en la práctica, reducir o aumentar las desigualdades. “Un sistema fiscal será justo si el sistema tributario es justo y si la política de gasto invierte de manera eficiente en la provisión de servicios públicos gratuitos, universales y de calidad, en la promoción del empleo y en la provisión de las infraestructuras necesarias”, señala un informe de Oxfam Intermón sobre justicia fiscal titulado *Tanto tienes, ¿tanto pagas?*



Foto: Joan Ggk



Diez cambios necesarios para una reforma fiscal justa

1. La política fiscal debe combatir la desigualdad al margen de intereses partidistas, contribuyendo a una sociedad más justa y equitativa.

2. Hay que recaudar lo suficiente para financiar un modelo social que garantice servicios públicos de calidad e igualdad de oportunidades.

3. Se debe aplicar “tolerancia cero” al fraude fiscal, incluyendo medidas que pongan freno a la impunidad de los evasores.

4. Los privilegios y la opacidad de los paraísos fiscales deben desaparecer.

5. Recaudar más no puede suponer aumentar el esfuerzo fiscal de las clases medias y los más pobres. Quien más tiene, ha de contribuir más.

6. Todos, empresas e individuos, deben tributar en función de su capacidad y de su actividad económica real, sin privilegios, ni excepciones.

7. Las grandes fortunas y las rentas del capital tienen que contribuir en mayor medida, para reducir la presión sobre los salarios y el consumo.

8. El sistema tributario tiene que ser progresivo y equitativo en su conjunto, sin medidas que favorezcan los intereses de unos pocos.

9. Los beneficios fiscales deben ser excepcionales y solo deben aplicar-

se si permiten crear valor real y duradero (como la creación de nuevos empleos de calidad).

10. Una buena política tributaria requiere un debate público abierto, transparente y con participación ciudadana.

(Tanto tienes, ¿tanto pagas? Informe Oxfam Intermón nº 35).



Foto: Oxfam Intermón

Un sistema tributario que recaiga sobre todo en las rentas del trabajo y el consumo, en lugar de gravar la riqueza, que no luche eficazmente contra el fraude y la evasión fiscal de las grandes fortunas, significa subvertir el principio que da sen-

tido a los impuestos, puesto que pagan más quienes menos tienen. Los impuestos indirectos juegan un papel muy importante en la capacidad redistributiva de la fiscalidad, puesto que están vinculados, no a los bienes que se poseen, sino a

los gastos, incluidos los que se hacen para satisfacer necesidades básicas, como la alimentación o la cultura. Si, por ejemplo, se sube el IVA de productos de primera necesidad, como alimentación o medicamentos, todas las personas que compran tributan por igual, independientemente de que presidan una multinacional o estén en el paro. Otro elemento significativo es qué se favorece con exenciones o desgravaciones y a qué rentas favorece. Ambos aspectos definen la orientación real de una política fiscal, y no las declaraciones ni las notas de prensa.

La tercera pata es su capacidad para que tribute todo el mundo que esté obligado a ello, sin excepción, especialmente las rentas más altas, mediante políticas efectivas de lucha contra el fraude y la evasión de capitales.

Parece que el sistema tributario que acabamos de describir es el español, que hace que quienes finan-



Foto: La Moncloa Gobierno de España



cian el Estado sean, sobre todo, las clases trabajadoras y el conjunto de la ciudadanía mediante los impuestos indirectos que gravan el consumo, como muestra un escandaloso dato extraído del citado informe de OI: las familias aportan casi 50 veces más a las arcas públicas que las grandes empresas. IRPF, IVA e impuestos especiales suponen alrededor del 80% de la recaudación líquida, dejando solo un 20% para el Impuesto sobre Sociedades, que la crisis ha rebajado hasta un 12% desde 2008.

Las rentas y ganancias del capital —especialmente si son muy cuantiosas— se suelen canalizar a través de instrumentos financieros que permiten una tributación muy inferior, de modo que la renta declarada no refleja realmente la capacidad económica de los sujetos. Uno de estos mecanismos son las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable), que posibilitan que los dueños de esos capitales tributen el 1% por sus beneficios, en lugar del 27% que les correspondería como renta de capital o el 30% como beneficio de una empresa. En España, los ingresos obtenidos por el trabajo pagan unos impuestos muy superiores a los ganados, por ejemplo, operando en Bolsa.

A esto se suma la gran cantidad y variedad de facilidades que el sistema proporciona a las grandes empresas, en forma de deducciones y exenciones fiscales. Según el citado informe *Tanto tienes, ¿tanto pagas?*, en 2011, a las diez mayores empresas del IBEX35 les hubiera correspondido pagar 10.211 millones de euros por el Impuesto de Sociedades (el 30% de los 34.036 millones de euros de beneficios antes de impuestos que obtuvieron); sin embargo, solo pagaron 5.796 millones (casi el 18% de tipo efectivo sobre la base imponible). El resto, 4.415 millones de euros (más que todo el presupuesto para salud de la Administración central en 2014), se quedó por el camino gracias al gran



Foto: The Real Duluoz

número de deducciones fiscales y estrategias contables.

Aunque quienes han tenido más responsabilidad en la crisis han sido las grandes entidades financieras y quienes más la sufren la ciudadanía de a pie, las medidas adoptadas para hacerle frente siempre han ido en el mismo sentido: aumentar la brecha en detrimento de la segunda. Una reforma del mercado laboral que facilita el despido, bajadas en la prestación por desempleo, rebajas en el salario mínimo... todo apunta en la misma dirección. En abril de 2011, el Gobierno dejó de vincular las grandes rebajas fiscales para las multinacionales al mantenimiento de sus plantillas. Cuatro meses después, Telefónica anunció su intención de despedir a 8.500 empleados. El año anterior, la multinacional española, lejos de tener pérdidas, alcanzó los mayores beneficios obtenidos nunca por una empresa española: 10.167 millones de euros. “El pasado mes de enero, el presidente Rajoy anunció que España saldría de la crisis en 2014. Hay brotes verdes. El crédito llega a las grandes empresas y hasta Bill Gates invierte en España. Ese mismo día, 4,7 millones de personas están todavía esperando en la cola del paro, nueve millones tienen problemas para pagar el recibo de la luz y casi la mitad de los ciudadanos españoles mayores de 15 años tiene problemas para com-

prar comida, ropa o medicamentos”. (Daniel Montero en *Gobernar para las élites*, 2013, pág. 14).

Las subidas del IVA en junio de 2010 y en septiembre de 2012 han supuesto un aumento de más de cinco puntos en poco más de tres años. En 2010 se subió también el gravamen de las rentas del ahorro en el IRPF. Por último, la reforma que se aprobó a finales de 2011 y que se hizo efectiva en 2013 al declarar las rentas de 2012 (en principio como medida temporal por dos años, pero ya extendida a 2014) supuso un aumento de los tipos impositivos del IRPF sobre el trabajo.

En España existe un considerable fraude fiscal (y una gran permisividad al respecto), que sigue parámetros parecidos. Aunque por su naturaleza delictiva es difícil tener cifras, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda estima que la evasión fiscal de impuestos en España ronda los 59.500 millones de euros por culpa de la falta de voluntad política en la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal. Esta cantidad supera los 57.000 millones que se destinan a sanidad entre todas las comunidades autónomas y la Administración central en 2014, y casi duplica los 30.370 millones de euros estimados de fraude laboral, por cotizaciones sociales no ingresadas.



Foto: Clara

Se estima que el 72% de los impuestos no pagados corresponden a grandes fortunas y empresas (casi 43.000 millones de euros), y el 28% restante (cerca de 16.500 millones) corresponde al fraude de pymes, autónomos y particulares. El fraude de las grandes fortunas y empresas es más que seis veces mayor de lo que España debería destinar a la cooperación al desarrollo si cumpliera el objetivo del 0,7% (7.000 millones de euros).

Por si todo esto fuera poco, existen los paraísos fiscales, esa especie de limbo donde los muy ricos colocan sus riquezas, lo que les permite beneficiarse de los bienes comunes, sin contribuir a ellos, o sin hacerlo en la medida que les corresponde. A pesar de las declaraciones de buena voluntad de gobiernos e instituciones internacionales, en los paraísos fiscales se esconden entre 21 y 32 billones de dólares, que equivalen a la suma de los PIB de EE. UU. y Japón, según el informe OI, que además, citando fuentes del Banco Central de Suiza (BNS), señala que en 2013 los españoles ocultaban aproximadamente 80.000 millones de euros solo en Suiza.

En España, 33 de las 35 empresas del IBEX35 tienen filiales directas

en paraísos fiscales no vinculadas con su actividad principal, y la tendencia aumenta con la crisis. Además, cada vez se reduce más la lista de países considerados fiscalmente paradisíacos (aunque sigan siéndolo). El citado informe señala que, desde 2010, países como Panamá, Bermudas, Mónaco y más recientemente las islas del canal británicas (Jersey, Guernesey, Isla de Man) han dejado de ser considerados paraísos fiscales para la Agencia Tributaria (Suiza nunca ha figurado en la actual lista, creada en 1998), lo que supone facilitar las condiciones para las empresas españolas cuyas filiales operan en esos territorios.

Estas prácticas resultarían más difíciles en un sistema más transparente, pero en España saber cuántos impuestos paga en realidad cada persona y cómo le afecta la adopción de una u otra medida tributaria es una información que no existe de manera oficial.

En la otra cara de la fiscalidad, la capacidad redistributiva, tampoco encontramos mejores noticias. Este efecto de los impuestos lo da la diferencia entre la desigualdad de rentas antes de impuestos y la desigualdad de rentas después de impuestos. Pues bien, el sistema fiscal

español (considerando impuestos y prestaciones) tiene un efecto reductor de la desigualdad de los más bajos de la Unión Europea. En 2012, España alcanzó el triste honor de ser el país europeo de mayor desigualdad, solo superado por Letonia.

Como explica Emilio Ontiveros en *Gobernar para las élites*, “la aplicación de políticas fiscales restrictivas ha contribuido a deprimir aún más la actividad económica y el empleo en las familias de menor renta, además de reducir prestaciones sociales básicas que han deteriorado los niveles de bienestar de las familias de menor renta de forma significativa”.

Una buena parte de la sociedad está enormemente frustrada por las evidencias sobre lo injusto del sistema tributario, porque se le exige un esfuerzo mayor para hacer frente a los objetivos de déficit, porque mientras realiza ese esfuerzo a cambio recibe constantes recortes en las políticas públicas de las que debería beneficiarse, y porque ve que no hay una actuación contundente contra quienes abusan del sistema robando el dinero público. La opinión de que las reglas tributarias están diseñadas para favorecer a los más ricos es generalizada. (*Tanto tienes, ¿tanto pagas?*, Oxfam Intermón).



2. Auge y caída del Estado del bienestar

Entre el final de la Segunda Gran Guerra y los años 70, la mayoría de países occidentales (aunque con grandes diferencias entre el modelo europeo y el norteamericano) alcanzan cotas de bienestar social y de seguridad social nunca conocidas. El llamado “consenso keynesiano” hace que algunos de los privilegios de clase empiecen a ser considerados derechos universalizables. Es el Estado del bienestar y el momento de las clases medias, aunque no con igual desarrollo en todos los países. En los países del sur de Europa que soportaron dictaduras (España, Portugal, Grecia), la expansión del Estado del bienestar fue más débil y más ralentizada.

Este nuevo paisaje –pleno empleo y bienestar sostenido– modificaba la relación de fuerzas trabajo-capital, equilibrándolas, lo que no tarda en provocar reacciones. A lo largo de los años 70 se va preparando una revolución conservadora que alcanza su triunfo al final de la década, con la llegada al poder de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y de Ronald Reagan en Estados Unidos.

Con la excusa de la crisis del petróleo de 1974, se reorganiza el capitalismo bajo la influencia de los economistas de la Escuela de

Chicago, que ya habían puesto en práctica sus recetas en el Chile de Pinochet (el documental *La doctrina del shock* lo explica detalladamente). Al consenso keynesiano le sucede el consenso de Washington (aunque la denominación es de finales de los 80), unas políticas económicas que traían Thatcher y Reagan en sus agendas: bajada de impuestos y del gasto social, todo el poder al mercado, máxima libertad para la iniciativa privada y constantes restricciones a la actividad del sector público. Significan el desmantelamiento del Estado del bienestar, el adelgazamiento hasta lo increíble del propio Estado, que ambos mandatarios consideraban que era el problema, no la solución.

Se difunde un nuevo dogma –lo público es sinónimo de derroche e ineficacia; lo privado garantiza la buena gestión y la eficiencia–, que prepara la privatización masiva de empresas y servicios públicos, convirtiendo en mercancía, con lógica mercantil, lo que se venían considerando servicios públicos, vinculados a derechos que el Estado debe garantizar (sanidad, energía, agua, etc.). Es la puesta en práctica política del axioma que dice que el Estado es el problema, y el mercado la solución.

En otras palabras: lo que era de todos pasa a ser propiedad privada (previo saneamiento con fondos públicos cuando es necesario), con el empobrecimiento colectivo que ello supone y, sobre todo, con el copernicano cambio de prioridades: el objetivo no es prestar un servicio, sino extraer el mayor beneficio posible. El papel del Estado se modifica radicalmente: de garante de derechos de la ciudadanía pasa a garante de que no haya trabas a los mercados.

Es el triunfo del neoliberalismo, que significa la subordinación de lo político a lo económico, del Estado al mercado, de los derechos de la ciudadanía al enriquecimiento de unos pocos. Las personas se ven despojadas de su ciudadanía política, para beneficio de la ciudadanía económica, que, como diría años más tarde Saskia Sassen, es detenida por las grandes corporaciones. El bien común, el espacio de lo público, se hace cada vez más pequeño. “El sometimiento de los gobiernos a las exigencias del mercado y, por tanto, del poder económico, supone una quiebra de la democracia y una pérdida de la soberanía de la ciudadanía”. (Pepe Montalvá. “Trabajo digno para una sociedad decente”. *Cuadernos HOAC*, nº 9)





3. Cuando los derechos se tuercen

Constitución Española:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Pacto Internacional DESC:

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y **vivienda adecuados**, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. (Art. 11.1)

Declaración Universal de los DDHH:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la **vivienda**, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. (Art. 25.1)

Derecho a una vivienda digna

La relatora especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, en su informe anual relativo a 2012, destacaba al Estado español como ejemplo negativo de una política fallida, "que ha llevado a la ruina a cientos de miles de personas, a través de 400.000 ejecuciones hipotecarias desde 2007". Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2008 (primer año de la crisis), se ejecutaron en España 26.748 lanzamientos o desalojos forzosos; en los años sucesivos se han ido incrementando, hasta alcanzar los 70.257 durante 2012. Téngase en cuenta que esta cifra solo recoge los que llevan a cabo las comisiones de "servicios comunes de notificaciones y embargos" (funcionarios judiciales, policía y cerrajero), pero no los realizados por los propios juzgados en las localidades donde no hay "servicios comunes".

Ni la denuncia de la relatora de la ONU ni las abultadas cifras han modificado las políticas: en los primeros seis meses de 2013 se realizaron

19.567 entregas judiciales de una vivienda hipotecada, cuando en todo 2012 habían sido 23.774. En la primera mitad de 2013, fueron desalojadas de su vivienda habitual 15.451 familias, frente a las 19.335 desahuciadas en todo el 2012. (Mientras, se calcula que hay 3,44 millones de casas vacías en toda España).

Las organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI), denuncian que los desalojos forzados, una violación de los DDHH y del derecho internacional, suelen hacerse sin las garantías que corresponden:

1. Consulta previa sobre las condiciones de las personas afectadas.
2. Plazo razonable antes de la ejecución.
3. Las personas afectadas han de participar en el proceso de decisión.
4. Identificación de las personas que efectúan el desalojo.
5. Ofrecer medios judiciales si quieren presentar recurso ante los tribunales.



Foto: Daniel Torrejón

**Constitución Española:**

Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. (Art. 35.1)

Pacto Internacional DESC:

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. (Art. 6.1)

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. (Art. 7)

Declaración Universal de los DDHH:

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. (Art. 23.1)

Derecho a un empleo y a un salario

La globalización ha incentivado enormemente los procesos de deslocalización industrial, aumentando los niveles de paro y alejando el horizonte del pleno empleo que auguraba el modelo del Estado del bienestar. El filósofo André Gorz ha denominado este fenómeno como una refeudalización de las relaciones laborales en los países occidentales, donde la mano de obra se está precarizando con el objetivo –que parece que se está logrando– de volver a competir con la mano de obra barata de los países de la periferia. Como consecuencia, se está dando un proceso global de igualación a la baja tanto de los salarios como de las condiciones laborales.

Condiciones de trabajo inhumanas provocan accidentes como el de la fábrica que se quemó en Bangladesh en noviembre de 2012, en la que murieron cientos de trabajadores. Las plantas maquiladoras de México, Centroamérica y el Caribe son conocidas como “sweat shops”, talleres del sudor.

Los trabajadores de grandes corporaciones, como Wal-Mart o McDonald's, no tenían hace unos años derecho a sindicarse y el gobierno de Malasia declaró “unions free”, libre de sindicatos, el sector electrónico.

En España, lo que más ha crecido y sigue creciendo es la desigual-

dad. Según el informe de 2012 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los altos directivos de las empresas cotizadas en Bolsa cobraron en 2012 un sueldo medio de 474.000 euros, un 1,6% más que el ejercicio anterior, superando 53 veces el salario mínimo interprofesional, que ese año era de 8.979,63 euros. Es solo uno de los estudios que ponen de manifiesto esta tendencia, y que parece que se quedan cortos, según el Banco de España, que a finales de febrero de 2014 alertaba que la desigualdad podría ser en realidad mayor de lo que reflejan las estadísticas.

Los salarios y los derechos han disminuido tanto, que tener trabajo ya no salvaguarda de la pobreza; es lo que se llama la pobreza laboral, cuya tasa ha pasado del 10,7% en 2007 al 12,7% en 2012. La clase obrera está pasando del proletariado al *precariado*, término nacido para nombrar la actual situación del mundo del trabajo.

Uno de los rasgos es el aumento, a ambos lados del Atlántico Norte, de la proporción de la población empleada que nunca tiene un trabajo fijo, pasando de una empresa a otra, incluso de una profesión a otra. Los salarios y las aportaciones a la Seguridad Social son considerablemente inferiores a los de los contratos fijos y las prestaciones más limitadas, lo que los convierte en los contratos preferidos, en general, por los empresarios. En EE.UU. representan el 30% de toda la po-



Foto: Leifeloern



blación empleada, y algo similar ocurre en la UE. En 2013, en España se perdieron 269.500 contratos indefinidos, pero firmaron contratos temporales 81.300 personas más.

La precarización perjudica también al conjunto de la sociedad. Los salarios bajos ralentizan la demanda (si yo no me puedo comprar unos zapatos, quien los vende no puede comprarse una bicicleta, lo que hace difícil que quien la vende pueda ir al cine y quien la fabrica mantener los puestos de trabajo, etc.), en un círculo vicioso que no para de girar. Los contratos temporales y de precarias condiciones (los únicos que aumentan) empobrecen las arcas de la Seguridad Social, puesto que sus cotizaciones son mucho menores y menos sostenidas en el tiempo. “Es interesante notar –escribe Vicenç Navarro– que los mismos economistas neoliberales que alertaban del impacto negativo que la Transición demográfica tenía en la viabilidad de la Seguridad Social están apoyando las políticas que están destruyendo las fuentes de financiación de la Seguridad Social. Así de claro”.

El BSE indica que, a partir de 2008, la evolución del ámbito laboral, tanto en acceso al empleo como en condiciones laborales, “muestra un continuo retroceso: la mayor caída del índice se produjo en 2009 (-15,6%) y en 2012 se registró un nuevo e importante paso atrás (-12,6%); en el primer momento, la principal consecuencia fue la pérdida de empleo masculino relacionado con el sector de la construcción; en el segundo, un deterioro generalizado que refleja el impacto negativo de la reforma laboral”.

Puesta en marcha por el Gobierno en 2012 como solución al problema (“el mayor avance la historia de la humanidad”, según Ana Botella), no parece que haya arreglado nada: en los dos primeros años de su entrada en vigor, los salarios se han reducido de media un 10%, según el tercer Observatorio de Segu-



Foto: Chema Sanz

miento. El salario mínimo interprofesional se congeló en 2013 en una cuantía de 9.034,20 euros al año (645,30 euros/14 pagas); aunque es el mínimo legal, a mediados de 2014 en algunas zonas, como Galicia o Aragón, más del 30% de las personas con trabajo no llegaban a esa cifra, y en el resto de España el panorama no era mucho mejor. Estos sueldos de miseria y las altas tasas de desempleo están entre las causas de que tres millones de personas no tengan garantizada la subsistencia básica, puesto que sus ingresos están en torno a los 300 euros mensuales, según el BSE, y que uno de cada cuatro españoles se encuentre en riesgo de pobreza o exclusión social, según el informe de OI *Crisis, desigualdad y pobreza*.

No ha sido lo único en menguar; la tímida mejora de las cifras del desempleo se deben a la precarización de las condiciones de trabajo: han aumentado las contrataciones a tiempo parcial y las de formación y aprendizaje, especialmente en las empresas de mayor tamaño; de enero a noviembre de 2013, el nú-

mero de contratos indefinidos firmados disminuyó 22,5%. Un significativo retroceso ha sido que esta reforma prácticamente elimina la negociación colectiva, acabando un importante contrapeso de la desigualdad de las relaciones laborales, al mismo tiempo que con décadas de lucha obrera.

La citada reforma ha venido a acentuar la desigualdad. El año pasado, las empresas del IBEX 42 ganaron en conjunto 18.500 millones de euros, casi un 58% más que en 2012. Tal vez por ello, en el Global Forum Spain celebrado en Bilbao a primeros de marzo de 2014, altos ejecutivos de algunas de las empresas del IBEX 35 elogiaron las reformas acometidas en los últimos años, que, “aunque insuficientes, han alejado al país del precipicio y han sentado las bases de una recuperación que sus compañías están notando, pese a que sigue sin percibirla la mayoría de los ciudadanos”.

Ya lo dijo en una ocasión el director ejecutivo de General Electric: “Para competir, hay que exprimir los limones”.



Constitución Española:

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. (Art 43)

Pacto Internacional DESC:

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

(...)

- d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. (Art. 12)

Declaración Universal de los DDHH:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la **salud** y el bienestar, y en especial la **alimentación**, el **vestido**, la **vivienda**, la **asistencia médica** y los **servicios sociales** necesarios (...) (Art. 25)

Derecho a salud

Para que la cobertura sanitaria sea considerada universal, debe cumplir tres requisitos: totalidad de la población, totalidad de los servicios (o la mayoría, incluyendo todos los básicos) y gratuidad. Las políticas implementadas con el discurso de la crisis van en sentido contrario y nos llevan a un sistema de tres velocidades:

- **Ricos:** todos los servicios.
- **Clase media:** muchos servicios.
- **Pobres:** paquetes sanitarios.

La privatización progresiva de la sanidad revela un cambio de modelo: el paso de la salud como derecho a la salud como negocio, y, en consecuencia, de considerar que las personas somos ciudadanía sujeto de derechos, a clientes. Los proveedores públicos tienen como finalidad la salud del paciente y el bien social; los recursos humanos y técnicos sirven a ese fin. Los proveedores privados tienen como objetivo maximizar los beneficios empresariales; la salud del paciente y el bien social son solamente medios.

Tiene derecho a la salud quien puede pagarla, bien como seguro privado, bien porque trabaja y cotiza, lo que limita extraordinariamente el acceso a la salud de los colectivos más vulnerables.



Foto: Jacinta Lluch

Los mecanismos de privatización funcionan así:

- El primero y más importante, infrafinanciación de los servicios públicos, que los deteriora y desprestigia.
- Énfasis en el control de enfermedades, olvidando la atención al paciente.
- Subcontratación en el sector privado.
- Alquiler o venta de hospitales públicos.
- Autonomía de gestión para hospitales públicos.

La prestigiosa revista médica *The Lancet* publicó en marzo de 2013 un estudio sobre los efectos sanitarios de la crisis económica y de las políticas de austeridad en Grecia, Portugal y España, que concluía que “los suicidios y los brotes de enfermedades infecciosas son cada vez



Foto: Popicino



Foto: Erwin Morales

más comunes” como consecuencia de las políticas de austeridad. Unos meses más tarde (junio de 2013), otro estudio, este publicado en el *British Medical Journal*, alertaba de que la austeridad provoca más casos de VIH y tuberculosis. La publicación sostenía que los recortes aplicados como parte de las medidas de austeridad en España podrían llevar a un desmantelamiento efectivo de grandes partes de su sistema sanitario y a un daño significativo en la salud de la población.

El proceso de privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid ha sido emblemático y uno de los que más datos hay, gracias a las

grandes movilizaciones de la Marea Blanca y al Observatorio Madrileño de la Salud, integrado por ayuntamientos, sindicatos, asociaciones profesionales y diversas entidades sociales. En su tercer informe, publicado en enero de 2014, denunciaban que el proceso de privatización significa una continua descapitalización de la sanidad pública. “Los hospitales públicos han tenido una disminución del 16,5% en 2013 que debe sumarse a la del 9,5% en 2011 y el 1,5% en 2012. (...) Los presupuestos de 2013 y 2014 continúan esta línea de recortes (148 y 130 millones de euros menos para sanidad)”. Los recortes producen una “dramática disminución” de medios

materiales (infraestructuras, equipamientos, material fungible, etc.) y de profesionales, “poniendo en peligro su funcionamiento”. El Observatorio calcula que han desaparecido más de 3.300 puestos de trabajo públicos en la sanidad madrileña en solo doce meses. Una de las consecuencias es el incremento de las listas de espera; solo en la quirúrgica, pasaron de 47.966 pacientes en septiembre de 2004 a 70.918 en septiembre de 2013 (un 47,85%), incrementándose el número de personas que esperan y los tiempos de espera en más de seis meses.

Por otra parte, los argumentos aducidos para la medida –mayor eficiencia y ajuste de gastos– son radicalmente desmentidos por los hechos: los seis hospitales que pasaron a gestión mixta incrementaron su presupuesto más de un 20% de media (entre el 17,6% del Hospital del Sur al 24,5% del Hospital de Vallecas), aunque se mantienen intactas las actividades y objetivos.

El gobierno madrileño dio por finalizado el proceso de privatización de la sanidad en abril de 2014, a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que lo dejó en suspenso. Sin embargo, en mayo de 2014, la Marea Blanca denunció que las privatizaciones en sanidad continúan a través de “solapadas estrategias”, como derivaciones a centros concertados y privatización y cierre de laboratorios públicos.



Foto: Popicino

**Constitución Española:**

Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. (Art.39)

Pacto Internacional DESC:

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. (Art. 9)

Declaración Universal de los DDHH:

(...) tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. (Art. 25)

Derecho a protección social

Si las luchas obreras y la presión social determinaron un avance de los derechos sociales y laborales durante décadas, que el incremento de la generación de riqueza –logrado con el esfuerzo colectivo– hizo pensar que sería continuo, la tendencia comenzó a ralentizarse en los años 80, y el discurso de la crisis ha significado la inversión de la tendencia. La jornada de 35 horas semanales en Francia, a finales de los años 90, implantada por el primer ministro Lionel Jospin, quedó como una isla excepcional, sin continuidad, que solo confirmó la regla.

La Seguridad Social nace precisamente como herramienta para cubrir las necesidades de las personas en situación de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte, así como para prestar asistencia médica y ayuda a las familias con hijos. Pero las medidas de protección social tienen poca cabida en una lógica capitalista de máximo beneficio que todo lo convierte en mercancía, de manera que ya solo están presentes en los discursos, pero no en las políticas.

Lo que está ocurriendo con las pensiones es paradigmático en este sentido. No solo se retrasa cada vez más la edad de jubilación, sino que se endurecen progresivamente las condiciones, de manera que es necesario cotizar más y durante más años, para acceder a pensiones menguantes (el 55% de los pensionistas cobra menos del Salario Mínimo Interprofesional), sin que parezca que tenga límite, puesto que políticos y organizaciones patronales reclaman siempre mayores alargamientos de la vida laboral.

El discurso justificativo es que el recorte creciente es necesario para hacer frente al envejecimiento demográfico, que se acentuará a partir de 2020 por la llegada de las generaciones nacidas en el *baby boom*, al que solo puede hacerse frente con reformas adicionales. Las arcas de la Seguridad Social, se nos dice, cada vez atesoran menos fondos y más telarañas, de manera que, se argumenta, el sistema, tal como está, es insostenible a medio plazo y terminaría por arrastrar en su caída la economía nacional.

Sin embargo, no faltan economistas solventes –incluidos Premios Nobel, como Joseph Stiglitz– que ponen en cuestión tanto los argu-



Foto: Bridget Coila



Foto: DGTX

mentos apocalípticos como los datos que los sustentan. Los fondos que sostienen la Seguridad Social en España proceden mayoritariamente de las retribuciones salariales, una parte aportadas por los empresarios y otra descontada de las nóminas de los trabajadores. El mayor peligro no viene tanto del envejecimiento de la población como de las abultadísimas cifras de paro. Además, la situación no es tan ruinosa. Aunque economistas neoliberales llevan décadas augurando la debacle, esta no llega. Como explica Juan Torres López en su libro *Contra la crisis, otra economía y otro modo de vivir*, las predicciones alarmistas de que, sucesivamente, el déficit llegaría en 1995, 2000, 2005, 2010 y 2050, “nunca han acertado”. En 2010, con más de cuatro millones de personas en el paro, se registró finalmente un superávit de 2.383 millones de euros.

La solución, se nos dice, es que complementemos la magra pensión que eventualmente nos llegará con fondos de pensiones privadas, lo cual no deja de tener visos de humor negro en una situación de paro creciente y condiciones laborales menguantes. Torres López denuncia en el citado libro que en realidad estos fondos constituyen “simples depósitos o fondos de ahorro”, que siempre han estado al alcance de quienes cuentan con una renta sobrante suficiente para ahorrar, y que en rea-

lidad solo resultan rentables para quienes tienen rentas muy altas.

¿Quién sale ganando? Algunos economistas denominan la presente época como de capitalismo de casino, y sabido es que en los casinos la banca siempre gana, puesto que, en resumidas cuentas son dineros que los ahorradores ponen en manos de los bancos para que inviertan en los mercados financieros; es decir, ni siquiera son seguros, puesto que están sujetos a las fluctuaciones de estos mercados.

Más allá de su seguridad y rentabilidad, el fondo de la cuestión es que, una vez más, se trata de privatizar servicios públicos, de convertir en mercancía los derechos de la ciudadanía. Como explican Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón en *¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos. Las respuestas que siempre nos ocultan* (www.attacpv.org/docs/Pensiones_Attac.pdf), “detrás de esas afirmaciones hay modelos que se presentan como muy elaborados pero que en realidad están sostenidos en supuestos infundados. Gracias a ellos se difunden un día detrás de otro mensajes catastrofistas que van haciendo mella en los ciudadanos que al final terminan por creerse lo que oyen tantísimas veces.

Lo que quieren lograr con esos discursos es muy sencillo: que sean los

bancos y no los poderes públicos quienes manejen el ahorro colectivo, y que ese ahorro se gobierne con vistas a darle rentabilidad privada y no equidad o solidaridad entre una generación y otra.”

Resulta especialmente hiriente el trato que están recibiendo las personas en situación de **dependencia** y sus familiares. En 2006 se aprobó la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, más conocida como “ley de dependencia”, presentada por el Gobierno Zapatero, su promotor, como un gran avance social. Su desarrollo y financiación se vieron frenados solo un año después de su entrada en vigor, cuando apenas comenzaba su aplicación. El cambio de Gobierno solo empeoró el panorama. Sus dos primeros presupuestos generales disminuyeron los fondos destinados a este fin hasta el 65%; sobre estos recortes, los presupuestos de 2014 recortaron más del 46%, lo que deja la ley en papel mojado y más de un millón de personas afectadas, entre dependientes y cuidadores familiares, con unas ayudas irrisorias o directamente inexistentes.



Foto: Big Max Power



Foto: Fernando Mafé

**Constitución Española:**

Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. (Art. 27.1)

Pacto Internacional DESC:

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. (Art. 13.1)

Declaración Universal de los DDHH:

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. (Art. 26.1)

Derecho a la educación

Entre 2005 y 2009 la partida de educación en las cuentas públicas había experimentado un incremento del 17,9% (del 4,3 al 5,07% del PIB), mejorando claramente las cifras de la década anterior, según el BSE, un proyecto de evaluación continua de la situación social, realizado por el Colectivo loé, especializado en investigación social. Las políticas adoptadas a partir del 2010 para afrontar la crisis, centradas en la reducción del gasto público, con especial repercusión en las inversiones sociales, tienen consecuencias importantes en el ámbito educativo. En 2010-11, con el Gobierno del PSOE, la reducción del presupuesto educativo fue del 3,6%, y en el año siguiente, el Gobierno del PP redujo otro 2,7%, alcanzando el 4,76% del PIB, según la misma fuente. Si tenemos en cuenta que desde 2011 el PIB ha descendido más de un 5%, la reducción es aún mayor en términos absolutos.

Los alumnos matriculados en centros públicos de enseñanza no universitaria han aumentado en estos años de crisis un 7,7%. El resultado de menos dinero para más alumnado es que el gasto por alumno se ha reducido un 7,8%, pasando de 6.457 a 5.951 euros. Puesto que la disminución de fondos también ha afectado al número de profesores y profesoras, la ratio profesorado/alumnado se ha visto incrementada en un 3,1%, rompiendo la tendencia positiva que se venía registrando desde comienzos de los años 90.

En los últimos años ha mejorado la tasa de abandono escolar, pasando del 31,9% en 2008 al 26,5% en 2011, como consecuencia del aumento de dificultades para acceder a un empleo, con una tasa de paro juvenil superior al 55% en el primer trimestre de 2014. Una mejora relativa que no ha cambiado la posición de cola de España en este triste ranking, solo por delante de Portugal y Malta.

En cuanto a los estudios universitarios, el dato tal vez más escan-

daloso es la brutal subida de las tasas universitarias, que significa un freno decisivo de la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores. Para el curso 2014-2015 (año de elecciones autonómicas), a finales del curso anterior, ocho comunidades autónomas anunciaron que no las incrementarían, y tres más que solo aplicarían la subida del IPC. Esta congelación viene, según datos del propio Ministerio de Educación, tras unos años de fuertes incrementos generalizados (solo Galicia y Asturias las han mantenido sin cambios en los dos últimos cursos), que en algunos casos, como Cataluña y Madrid, superaron el 60%, por lo que la reivindicación de las asociaciones de estudiantes es que bajen, especialmente en unos tiempos en que las maltratadas economías familiares disponen de menos dinero para lo que no sea gastos de subsistencia.



Foto: Universidad de Navarra

Estas son las cifras. En el terreno educativo, las repercusiones son difícilmente mensurables a corto plazo, de manera que los efectos de las políticas de recortes se dejarán ver en unos años. Sin embargo, es difícil no estar de acuerdo con la lectura que de estas cifras hace el BSE: "Son muchas las medidas que apuntan a un claro deterioro de la educación pública, como la ampliación del número de alumnos por aula, el recorte de plantillas, la menor cobertura de bajas del personal y el aumento correspondiente del horario lectivo del profesorado; recortes en transporte y comedores escolares; incremento del precio de las matrículas, etc."



Pacto Internacional DESC:

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

- a) Participar en la vida cultural;
- b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones.

(Art. 15.1)

Declaración Universal de los DDHH:

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. (Art. 27)

Derecho a la vida cultural

La disminución de las rentas familiares repercute directamente en la participación en la vida cultural, puesto que han de dedicarse a las necesidades básicas. A esto viene a sumarse el encarecimiento mediante una brutal subida del IVA, que en septiembre de 2012 pasó del 8% al 21% (el más alto de la eurozona). Una vez más, en lugar de garantizar el acceso universal a los bienes culturales, como corresponde a un derecho, se considera la cultura como una mercancía de la que sacar beneficio.

Esta medida no solo convierte la cultura –cine, teatro, conciertos, libros, exposiciones, etc.– en artículo de lujo, fuera del alcance de capas de la sociedad cada vez más amplias, sino que está estrangulando el sector. Hasta junio de 2013, se cerraron en España 150 salas de cine, quedando algunas ciudades sin ninguna. La facturación de conciertos y festivales musicales se redujo casi un 30% en el primer año de aplicación del nuevo IVA.



Foto: Karla Nney

A comienzos de 2014 el Gobierno revisó su decisión y rebajó el IVA al 10%, pero solo para el mercado del arte; es decir, que se benefician personas de alto poder adquisitivo. Ir al cine y al teatro, o comprar un libro sigue gravado con el 21%.

En cuanto a la investigación, si entre 2007 y 2011 el gasto público español estaba a la cola de la UE, en 2014 “la I+D española estará en el nivel de financiación de 2002 o 2003”, denunciaba José Molero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense.

Foto: Turismo Madrid



Foto: Literatura Eskola

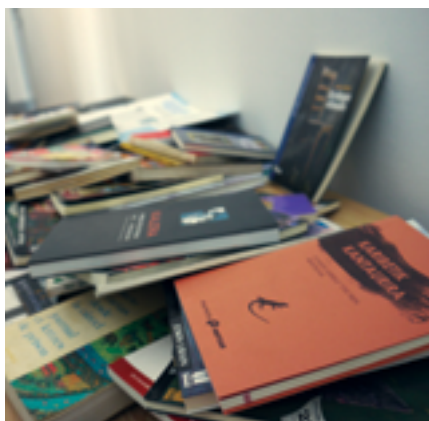


Foto: Joseba Barrenexea



4. Consecuencias de la pérdida de DDSS: desigualdad, pobreza... y deslegitimación institucional



Foto: Polycart

La pérdida de derechos económicos y sociales se traduce en mayores desigualdades y en deterioro democrático.

Aunque la crisis ha sido y es utilizada como excusa, la situación actual responde más a razones estructurales y tiene que ver con las raíces y la evolución del sistema. La actual etapa del capitalismo, con la hegemonía del pensamiento y las políticas neoliberales, se concreta en el mundo de los valores en un hiperconsumismo. Se consagra el paso de ciudadanos a consumidores, con todo lo que ello comporta: la mercantilización de todas las realidades, un hiperindividualismo, con la consiguiente atomización social.



Foto: Félix Bernet

La salud, la educación, la protección social, etc., han pasado de servicios a mercancías, lo que convier-

te el derecho a acceder a ellas en el “derecho” a elegir el producto que preferimos. Y nos lo hemos creído. El problema es que el derecho está vinculado a la ciudadanía; aún más, al hecho de ser personas, mientras que la libertad de elegir producto viene condicionada por la posesión de dinero para comprar. El salto ha sido enorme, mortal –para la ciudadanía– y enormemente dañino para la democracia y la justicia; es decir, para nuestros intereses como seres humanos. No se “elige” la educación o la salud; hay que garantizar el acceso de todas y cada una de las personas a la educación, la salud, la vivienda, etc.

El tránsito de ciudadanos y ciudadanas a consumidores y consumidoras lleva a la ilusión de confundir libertad de elección con libertad –no universal– de compra; mientras, nos han robado la capacidad y la posibilidad de decidir sobre los asuntos fundamentales de nuestra vida colectiva (y, por tanto, personal), que configuran el bien común. Tras la perversión de la economía, la perversión de la política, que es como decir el deterioro de la democracia. Un espacio público cada vez

más pequeño va desvaneciendo el bien común no solo como horizonte compartido, sino como mero concepto, poniendo de manifiesto que los derechos económicos, sociales y políticos no están tan lejos unos de otros. O, lo que es lo mismo, que la trasnochada disyuntiva libertad/igualdad es, más que un conflicto falso, un planteamiento engañoso (y con frecuencia interesadamente mentiroso). Puede decirse que el reconocimiento práctico de los derechos sociales es un termómetro fiable de la salud democrática de una sociedad. No es posible separar democracia de justicia, de manera que todo retroceso de la segunda lo es también de la primera. Sin excepción. (A no ser que nos limitemos a una concepción mecanicista de la democracia que la reduce a ritos).



Foto: La Moncloa Gobierno de España



Foto: Pepe Pont



Las desigualdades socioeconómicas se han incrementado enormemente. En los años 70, el 1% de la población estadounidense acumulaba el 9% de la riqueza total; en 2012, ese 1% concentraba ya el 24% de la riqueza. En contraposición al proceso de convergencia social y económica que significó en



Foto: Brett Tatman



Foto: R. Barraez Di Lucca

ese país el New Deal en la década de los 30 y 40, y en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, esto fue, en palabras de Paul Krugman, “la gran divergencia”, refiriéndose al paulatino enriquecimiento de una minoría a costa de la mayoría. La década de los 80 supuso la imposición práctica de estas políticas, lideradas por Reagan en EE. UU. y Thatcher en el Reino Unido, y su legitimación ideológica. La década terminó con la caída del Muro de Berlín, que escenifica el final de la división del mundo en dos bloques y la expansión del capitalismo en su fase “de casino”. Y el auge de una división con criterios diferentes: ya no será Este/Oeste, sino que la división Norte/Sur no será geográfica, sino socioeconómica y afecta de manera transversal a todos los países. La llamada crisis ha venido a acen-

tuar la tendencia. Según el BSE, en 2008, la población en situación de pobreza (menos del 60% de la renta media) estaba en torno al 20%, y tres años más tarde superaba el 22% (hace 20 años apenas superaba el 18%; se ve que la crisis no lo explica todo).

¿Qué alimenta esta desigualdad? Los datos y muchos expertos coinciden en la causa básica: favorecer las rentas del capital a costa de las del trabajo, facilitando así un trasvase sin precedente conocido de recursos de los sectores más pobres de la sociedad hacia los más ricos. Vicenç Navarro lo nombra de manera más clara y concisa: la explotación social. “La riqueza de los países a los dos lados del Atlántico Norte ha crecido muy significativamente [en los últimos cuarenta años]. Pero esta riqueza, resultado del crecimiento de la productividad, ha ido más a enriquecer al mundo del capital, es decir, a los propietarios y gestores de las grandes empresas (donde creció la productividad), a través del enorme crecimiento de los beneficios empresariales y de las retribuciones a los dirigentes y delegados de estas empresas, a costa del escaso creci-



Foto: Daniele Muscetta

miento de los salarios que reciben los trabajadores”. De hecho, en EE. UU. los salarios son hoy más bajos que en 1968, cuando Luther King exigía un mínimo de 2 dólares/hora (Obama propone un salario que, en dólares de hoy, equivale a 2/3).

“La evidencia –prosigue Navarro– es clara y contundente. A partir de los años 80, el mundo del capital ha estado incrementando su poder y sus beneficios, con la ayuda de los Estados a costa del mundo del trabajo. De ahí que los primeros han ido viviendo mejor a costa de que otros (la mayoría de la ciudadanía que obtiene sus rentas del trabajo) vivan peor. Esto es lo que se llamaba, y debería continuar llamándose, explotación”.



Foto: Raphaël Thiémond



El nombre de la cosa, o ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?

¿Cómo puede la ciudadanía aguantar tan grandes y continuados atropellos a sus derechos? La respuesta es compleja, pero uno de los factores que mejor lo explican es el nombre que damos a las cosas. Cantaba Mary Poppins que la peor medicina con azúcar pasará. Algo parecido ocurre con las palabras: hay denominaciones insoportables y otras que, con la misma realidad detrás, nos hacen aceptar lo inaceptable porque obstaculizan tomar concien-

cia de la realidad tanto como favorecen seguir el camino trillado de las verdades oficiales. “La ortodoxia es la inconsciencia”, escribió George Orwell. La lengua cuenta con una herramienta muy adecuada para esto, que se llama *eufemismo* (literalmente, “que suena bien”), y que consigue que no chirríe al oído lo que, sin embargo, atenta contra el sentido común y la decencia más elemental.

El nombre de las cosas y cómo se relata lo que pasa siempre fue un vigoroso instrumento del poder. Como explica Humpty Dumpty a Alicia, quien manda es dueño de las palabras. “El traje nuevo del emperador” es un cuento de Andersen que ilustra muy

bien este asunto y cómo responder: el niño que grita “¡El rey va desnudo!” deshace el nudo de la tiranía. Llamar a las cosas por su nombre siempre resultó emancipador.

Carlos Fonseca incluye al final de su libro *Tipos infames. Los políticos, banqueros y empresarios que se están forrando con la crisis* un “Breve diccionario político de la crisis” en el que denuncia la perversión interesada del lenguaje para enmascarar la realidad. “Tengan presente –advier-te– que *eufemismo* rima con *cinismo*”.

Estos son algunos ejemplos del diccionario de Fonseca, reproducidos con su permiso.

Dicen...	Pero significa...
Reglamentación fiscal extraordinaria	Amnistía fiscal
Esfuerzo y ejercicio de responsabilidad del Gobierno	Bajar las pensiones
Alineamiento de las retribuciones a las condiciones específicas de las empresas	Bajar los salarios
Acuerdo de flexibilidad	Bajar los salarios
Economía de mercado	Capitalismo
Tique moderador sanitario	Copago sanitario
Facilitar la gestión activa del patrimonio dañado de las entidades financieras	Dar dinero público a los bancos quebrados
Procedimiento de ejecución hipotecaria	Desahucio
Flexibilidad laboral	Despido libre y gratuito
Activos adjudicados	Embargos
Movilidad exterior	Emigración por falta de trabajo
Minijob	Empleo basura
Austeridad	Empobrecimiento de la población
Impacto asimétrico de la crisis	Ganan los ricos y pierden los pobres
Descuelgue	Incumplir los convenios firmados
Soluciones habitacionales	Minipisos
Bajas incentivadas	O te vas o te echamos
Emprendedor	Parado que se hace autónomo
Externalización de servicios públicos	Privatización
Retos o desafíos	Problemas



Antisistema	Quien defiende los servicios públicos
Racionalización laboral	Precarización del trabajo
Ayudas a los ahorradores	Rebajas fiscales para los más ricos
Reformas estructurales necesarias. Racionalización del gasto público. Optimización de recursos. Medidas de ahorro.	Recortes
Reforma del sistema financiero	Rescate de la banca
Ajuste tarifario	Subida de la luz
Retraimiento de la paga	Supresión de la paga extra a los funcionarios
Desaceleración. Desaceleración transitoria. Desaceleración acelerada. Desaceleración económica relativamente sincronizada, relativamente homogénea. Coyuntura económica claramente adversa. Deterioro del contexto económico. Escenario de crecimiento debilitado. Las cosas van claramente menos bien.	Crisis

El capitalismo industrial se ha convertido en financiero (el 93% de la economía no está vinculado a la producción de bienes o servicios, sino a la especulación). Por eso su actual fase se denomina “de casino”, que en lo social conlleva lo que David Harvey llama un proceso de “acumulación por desposesión”, caracterizado por la mercantilización y la privatización de bienes y servicios que, por su carácter público o común, estaban anteriormente cerrados al mercado. La privatización del espacio y los bienes públicos y el desmantelamiento del Estado del bienestar significan que el espacio de la política lo ha ocupado el mercado. “Hoy tenemos –dice Bauman– un poder que se ha quitado de encima a la política y una política despojada de poder”. Se configura así una globalización en la que, como avanzó hace años Petrella, los poderes reales son los financieros, que nadie ha elegido, y los poderes “públicos” son sus capataces, malversando así su legitimidad y perdiendo su sentido. De garantes de derechos se convierten en legitimadores de privilegios.

Estos años de políticas de austeridad, recorte del gasto y de los de-

rechos básicos, han agrandado aún más la brecha social. Los recursos públicos –es decir, de toda la ciudadanía– se han ido reduciendo, para enriquecer manos privadas, lo que supone una gran descapitalización. Empresas públicas que se sanean con fondos públicos para ir luego a manos privadas, políticas que favorecen a las grandes corporaciones, dejando a la ciudadanía indefensa, rescates de bancos que detraen millones de euros del erario público, procedentes de recortar inversiones sociales, a la vez que las mismas entidades financieras dejan sin casa –y endeudadas de por vida– a miles de personas.

Tal vez esta preferencia por los grandes explica que políticos de casi todos los colores, una vez acabada su etapa pública acaben ocupando puestos relevantes en las mismas empresas o sentándose en sus consejos de administración, con sustanciosos sueldos. Es lo que se ha venido en llamar “puertas giratorias”, que conectan los espacios público y privado, para beneficio de las clases dirigentes, en ocasiones con actuaciones legales (al fin y al cabo, quienes hacen las leyes son quienes transitan por esas puer-

tas), pero no legítimas (el citado libro de Carlos Fonseca lo explica con cifras y detalles).

Junto a la abundancia de casos de corrupción en las clases dirigentes y en los políticos, un gran fraude fiscal y políticas abusivas han confluído en una especie de ruptura del pacto social y de desconfianza en las instituciones. La indignación se ha concretado en un grito dirigido al centro de gravedad de la democracia representativa: “Que no nos representan, que no”.



5. Defensa de los DDSS y construcción de ciudadanía

La situación descrita ha caído sobre una ciudadanía en la que se va extendiendo la conciencia de que no es obligatorio resignarse porque “otro mundo es posible”. El Foro Social Mundial, que popularizó este eslogan desde su primera edición (Porto Alegre, enero 2001), ha significado la movilización de importantes sectores de la ciudadanía, la toma de conciencia de su poder y de su responsabilidad en los asuntos comunes. Las políticas gubernamentales para hacer frente a la crisis han indignado a una población propicia a pasar a la acción, como pusieron de manifiesto el 15-M (ver *Global Express* nº 18, “La rebelión de las plazas”) y todos los movimientos que le dan continuidad.

Crece poco a poco la conciencia de que todas las luchas son la misma lucha: locales y globales, minoritarias y mayoritarias, por los derechos sociales y por los derechos civiles. La respuesta a la situación de pérdida de derechos sociales es inseparable de la reconstrucción del pacto social. Pero no en los mismos términos. No se trata de regresar a ningún momento anterior, porque los tiempos son otros, y porque aquellos polvos nos trajeron estos lodos. Hay que redefinir los términos del pacto social, de modo que, como señala Juan Torres López (*Contra la crisis, otras economías y otros modos de vivir*), “los ciudadanos tengan el suficiente poder para asegurar que sus preferencias de-

mocráticas expresadas se conviertan en decisiones. Lo que hoy sucede es lo contrario: las preferencias de los ricos son las únicas que lo consiguen”.

El camino es establecer nuevos consensos, nuevos significados para conceptos como “cohesión social”; redefinir, en la práctica, el papel de las instituciones (y establecer mecanismos que garanticen su cumplimiento), de los movimientos sociales y el del conjunto de la sociedad civil, “será crucial para redefinir un futuro basado en la equidad, la justicia social y medioambiental y la solidaridad” (Oscar Mateos), a la vez que crear nuevos contrapoderes.



Foto: Fotomovimiento



Resistencias ciudadanas

La ciudadanía indignada se suele valer de formas de protesta tradicionales de los movimientos proletarios, la tradición no violenta, y otras que la imaginación va dictando.

La **huelga** es el recurso tradicional de la clase obrera para reivindicar, cuando se agotan las negociaciones, o para forzarlas, o para hacer presión cuando están en curso. Aunque la primera huelga de que se tiene noticia data del Antiguo Egipto, como forma de lucha está vinculada a la Revolución Industrial. El auge de la socialdemocracia en el siglo XX significó la legalización de los sindicatos y el reconocimiento del derecho de huelga. La idea es interrumpir la producción –es decir, los beneficios– para forzar al patrono a aceptar las reivindicaciones, de manera que la duración es un elemento significativo. El problema es que también se interrumpen los salarios, lo que convierte las huelgas de larga duración en una guerra de resistencias. Paros como el mantenido por los trabajadores y trabajadoras de la factoría de Panrico (Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona) a lo largo de ocho meses (otoño 2013-mitad 2014) son difícilmente sostenibles. Una de las respuestas tradicionales del movimiento obrero han sido las cajas de resistencia, nutridas de la solidaridad de los trabajadores para ayudar a subsistir en caso de huelgas de larga duración.

De gran tradición pacifista es la **huelga de hambre**, que consiste en que una persona o un grupo deja de ingerir alimentos para reivindicar un derecho o denunciar una situación. Gandhi realizó numerosas protestas de este tipo en su lucha por la independencia de la India. En España, alcanzó relevancia a principios de los 90 por las mantenidas por miembros de la Plataforma

0,7% reivindicando mayores compromisos gubernamentales con la cooperación internacional. Jaume Sastre, un profesor balear, ha mantenido varias huelgas de hambre para presionar al Gobierno insular a negociar con los docentes y, en último término, para reivindicar una educación de calidad.

Las **marchas** también tienen una gran tradición no violenta, especialmente la marcha de la sal, en la que Gandhi y sus seguidores recorrieron 300 kilómetros para protestar por el monopolio inglés sobre la producción y comercialización de la sal. En mayo de 2014, confluyeron en Madrid marchas por la dignidad precedentes de todo el Estado protestando por las políticas gubernamentales y reivindicando “pan, trabajo y techo”.

Scratch es el término inglés que designa los arañazos que se producen en los muebles o en el suelo al arrastrar algo sobre su superficie. En el “diccionario” del activismo significa seguir a alguien a su domicilio o lugar de trabajo para denunciar algún abuso o presionar en un determinado sentido a quien tiene capacidad de decidir. El uso político de la palabra nació en Argentina, en 1995, para denunciar ante la opinión pública a verdugos de la dictadura que habían quedado impunes. En la España de la crisis, ha sido utilizado sobre todo por la PAH ante quienes tienen alguna responsabilidad en los miles de desahucios.

La **objección de conciencia** es el rechazo al cumplimiento de una norma o ley por considerarla incompatible con las creencias de una persona. Se basa en considerar que el imperativo a seguir la propia conciencia debe anteponerse a cualquier obligación legal y, en principio, no pone en cuestión ni pretende cambiar dicha norma. La Constitución Española reconoce genérica-

mente en su Artículo 30 este derecho, pendiente de ser regulado en la correspondiente ley. Sin embargo, la única ley que se elaboró al respecto fue la que regulaba la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, estableciendo la prestación social obligatoria, de manera que, en la práctica, este derecho no puede ser ejercido legalmente.

La **desobediencia civil** consiste en no acatar una norma de obligado cumplimiento por considerar que no es justa, asumiendo las consecuencias que tal transgresión pueda acarrear. Se basa en la distinción entre legalidad y justicia. Es un acto político, puesto que el objetivo es modificar el orden jurídico para lograr mayores cotas de justicia y libertad para toda la sociedad, que ha de ejercerse de forma consciente, pública y pacífica. El adjetivo “civil” pretende poner de manifiesto que es un acto de responsabilidad ciudadana. Prácticamente con el mismo significado, existe el término **insumisión**, que pone el acento en el ejercicio de libertad que supone no someterse a lo que se considera injusto.

Son formas de **resistencia civil**, de larga tradición en los métodos de lucha no violenta, como el boicot y la huelga, entre otras. En el siglo XVI, Étienne de la Boétie, en su *Discurso de la servidumbre voluntaria*, la describe con claridad: “No deseo que le forcéis [al tirano], ni le hagáis descender de su puesto: basta con que no lo sostengáis más; y le veréis como un gran coloso al que se ha quitado la base y por su propio peso se viene abajo y se rompe”. Tres siglos más tarde, Henri Thoreau escribe en *Del deber de la desobediencia civil*: “Hay leyes injustas. ¿Nos contentaremos obedeciéndolas o trataremos de corregirlas y seguiremos obedeciendo hasta que lo consigamos o, más bien, las trasgrediremos enseguida?”.



Los objetivos son tan ambiciosos que se hace necesario trabajar a distintos niveles: global, europeo y estatal.

- a. A nivel global, es necesario avanzar hacia la construcción urgente de instituciones realmente capaces de gobernar la globalización y de establecer nuevas reglas de juego a los poderes financieros que garanticen el equilibrio entre lo político y lo económico.
- b. A nivel europeo, es urgente recuperar el espíritu del proyecto europeo original, basado en valores como la equidad o la solidaridad y sobre todo en la necesidad de que sea un verdadero contrapeso de la doctrina neoliberal.
- c. A nivel estatal, es necesario mejorar la eficiencia del sector público (fundamental para el proceso de cohesión social), pero también establecer prioridades con un rostro humano (moratoria a los desahucios y aprobación de la dación en pago, por ejemplo). [Papeles 217. Oscar Mateos]

En todos estos ámbitos se perfilan cuatro **líneas de acción**, que son otras tantas vías de compromiso personal.

- **Resistencia y denuncia:** es decir, trabajar para agrupar ciudadanos que se indignan ante una injusti-

cia y deciden oponerse a ella, desde la lucha contra los desahucios, pasando por la defensa de la sanidad pública, hasta la auditoria ciudadana de la deuda.

De la indignación por un tema que afecta personalmente, se pasa a la indignación por un modelo de sociedad que dificulta la vida a la mayoría de la gente y especialmente a los más débiles. A partir de ahí, se articulan plataformas y colectivos ciudadanos para resistir y dar respuestas adecuadas.

- **Construcción de alternativas:** promover y participar en proyectos colectivos que son escuela de democracia. La mayoría de estos proyectos tienen que ver con la democracia en la economía: cooperativas de consumo, cooperativas de trabajo asociado, asambleas de barrio, etc. Son estructuras de nivel intermedio fundamentales, pues en ellas, a la vez que se van construyendo respuestas a la injusticia que les dio origen, se ejercitan y practican valores que son la base para la regeneración democrática, y se desarrollan nuevas formas de participación y de acción política.
- **Concienciación (conciencia + acción) ciudadana:** sin un cambio de mentalidad personal, de las ideas sobre el mundo o la sociedad, resulta imposible el cambio social.

Este cambio incluye las actitudes, el conocimiento y la información, la capacidad crítica y la capacidad de compromiso y solidaridad. Solo las personas que transitan por este tipo de procesos pueden contribuir a la recuperación democrática a todos los niveles.

- **Local y global: un mundo ancho, pero no ajeno:** profundizar en la conciencia de que, aunque los problemas sean muy grandes y complejos y de alcance global, las acciones locales, aunque parciales, tienen su impacto. El reto es construir la democracia global, porque es en ese ámbito donde se mueven las reglas del poder económico, pero solo se construirá desde la ciudadanía global que trabaja en red, que hace presión, etc. Y ahí reside precisamente la importancia de las acciones locales.

Estas cuatro líneas de acción tienen un nuevo instrumento de comunicación y activismo que está siendo clave para su capacidad de movilización y de incidencia: las redes sociales. Un instrumento que también comienza a ser clave en la generación de conciencia crítica y de una nueva personalidad ciudadana. (Papeles CiJ 215. Elvira Durán)

La tarea es inmensa; la buena noticia es que no hay que empezarla: mucha gente ya está en ello.



Foto: Manuel



6. Sí se puede. Alternativas en marcha



Foto: Julien Lagarde

Estos desarrollos no se deben a leyes de la naturaleza o a leyes económicas o a otras fuerzas impersonales, sino al resultado de decisiones específicas dentro de estructuras institucionales que los favorecen. Esto continuará, a no ser que estas decisiones y planes se reviertan mediante acción y movilizaciones populares con compromisos dedicados a programas que abarquen desde remedios factibles a corto plazo hasta otras propuestas a más largo plazo que cuestionen la autoridad ilegítima y las instituciones opresivas entre las que reside el poder. Es importante, por lo tanto, acentuar que hay alternativas. (Noam Chomsky. Prólogo a *Hay alternativas*, de V. Navarro, J. Torres y A. Garzón)

En *Tipos infames*, Carlos Fonseca concluye que “la única puerta de salida es la indignación; la única posibilidad de cambio, la protesta; la única esperanza de futuro, la voluntad innegociable de cambiar esta sociedad injusta”. Mucha gente se ha puesto manos a la obra para, desde la indignación, protestar y construir alternativas.

Están surgiendo un gran número de iniciativas sociales y económi-

cas que dibujan un modelo de economía, de política, de sociedad, en suma, basado en valores sociales y cooperativos imprescindibles para avanzar hacia una situación de mayor justicia social y medioambiental, hacia un modelo que supere la lógica capitalista.

En gran medida son las gentes que llenaron las plazas en aquel amplio movimiento que dio en llamarse 15-M, al que algunos vaticinaron corta vida. No ha sido así. Con mucha menos visibilidad mediática, sigue vivo en asambleas locales y alimentando muchos de estos colectivos que de ninguna manera son realidades estancas, sino que están interconectados por vasos comunicantes muy transitados. En ocasiones, reclamaciones específicas concitan la solidaridad de todo el colectivo; en otras, unen fuerzas en amplias convocatorias, como las “marchas por la dignidad” que recorren las carreteras y las ciudades (22M) o rodean las instituciones (21J), con el lema “Pan, trabajo y techo”. Algunas de las reivindicaciones no solo han rodeado los parlamentos, sino que están logrando formar parte de ellos, a través de nuevas plataformas electorales y partidos.

Aunque cada colectivo presenta reivindicaciones específicas (acceso a vivienda digna, renta básica, acceso universal a sanidad de calidad, etc.), comparten reclamaciones de fondo, con frecuencia de manera explícita, construyendo así sinergias que ponen cada vez más de manifiesto que los problemas concretos apuntan a males de fondo y que, por consiguiente, no se trata tanto de remendar el vestido, como de hacer uno nuevo. La metáfora no es gratuita: desde el inicio, cada colectivo se ha ido identificando con camisetas de color identificativo, que conforman un pasaje plural, multicolor y complejo.



Foto: Emilio Vaquer



Las principales reivindicaciones compartidas son:

- Derechos básicos
- Defensa de lo público
- Democracia participativa, política y económica
- Justicia económica

La “**Marea Verde**” (<http://marea-verdemadrid.blogspot.com.es>) nació en Madrid en julio de 2011, y se ha convertido en el movimiento en defensa de una educación pública de calidad, con plataformas por todo el Estado, que llenan de camisetas verdes (amarillas en Cataluña, “Marea Grog”: <http://marea-groga.blogspot.com.es>) las calles, haciendo honor a su nombre, como una verdadera marea, que reclama el derecho a la educación.

La “**Marea Blanca**” (www.rebelmouse.com/MareaBlanca) agrupa los colectivos que defienden la sanidad pública y protestan con los recortes y las privatizaciones. Surgió también en Madrid, cuando el gobierno autonómico presentó un plan de privatización de seis hospitales y 27 centros de salud. Se ha ido extendiendo por todo el Estado y entre otros logros se cuenta conseguir que el Gobierno madrileño desistiera de sus planes privatizadores.



Foto: Imagen en Acción

Otras mareas han surgido, como la “**Marea Roja**” (investigación) y la “**Marea Naranja**” (servicios sociales) identificando con diferentes colores distintas reivindicaciones temáticas, que no son sino distintos aspectos de una misma reivindicación

de los derechos sociales, como se pone de manifiesto cuando se unen en convocatorias que convierten las calles en un arco iris ciudadano.

En noviembre de 2011, los “**yayo-flautas**” hicieron su primera acción colectiva, ocupando una sucursal del Banco de Santander en Barcelona. Comenzaron defendiendo sus pensiones, pero en poco tiempo se convirtieron en un colectivo muy activo siempre en defensa de derechos sociales.

El movimiento por una **renta básica** (www.redrentabasica.org) reivindica que toda persona sea pagada por fondos públicos como derecho de ciudadanía (ver recuadro).

[des]Banka (<http://desbanka.org>) nace como “frente ciudadano contra el poder financiero” para luchar contra los abusos de la banca y las consecuencias de un sistema financiero injusto. Reivindica que los servicios financieros sean servicios públicos y sociales (equiparables a la sanidad y la educación), puesto que son un instrumento necesario para hacer posibles proyectos de vida personales y una economía productiva.

El movimiento por los **presupuestos participativos** (www.presupuestos-participativos.com) trabaja para que los presupuestos públicos se hagan con la participación directa de la ciudadanía, de manera que respondan a sus demandas y prioridades. Más allá de constituir una herramienta de control financiero, quieren ser un instrumento de democracia participativa. Nacidos en el Foro Social de Porto Alegre, ya se han puesto en marcha en un buen número de municipios.

Democracia real ¡ya! (www.democraciarealya.es) es una plataforma que respalda y promueve acciones a favor de una sociedad más democrática y justa. Como muchos de estos movimientos, se articula en grupos locales, aunando los objetivos globales a partir de prioridades y problemas arraigados en el territorio.



Foto: Elena Cabrera



Foto: Arribasqueluchan

Son solo unas pocas muestras de los innumerables movimientos, colectivos, plataformas que articulan poder ciudadano. Junto a estas, de ámbito más amplio, existen aún más iniciativas locales, a veces nudos de plataformas estatales, a veces con carácter propio. Un ejemplo de esto último se encuentra en el municipio barcelonés de Figaró, gobernado desde hace diez años por una asamblea de vecinos, practicando una radical democracia participativa, siendo uno de sus pilares los presupuestos participativos. El documental *El reto de gobernar entre vecinos* da cuenta de la experiencia.

Además de reivindicaciones de fondo, estos movimientos comparten métodos de democracia radical. Sus vías de lucha son los tradicionalmente no violentos: huelga, desobediencia civil, insumisión, manifestaciones, etc., junto a otros más innovadores e imaginativos.

Y, en definitiva, tienen como denominador común llevar a la práctica algo esencial para la democracia: que la política no es solo ni principalmente asunto de los partidos, sino de la ciudadanía, que es en quien reside la legitimidad.



Si nos organizamos, podemos

La prehistoria de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) está en V de Vivienda, un movimiento nacido en Barcelona que venía protestando en la calle para denunciar las dificultades de los jóvenes para acceder a la vivienda. Viendo venir el estallido de la burbuja inmobiliaria, en febrero de 2009 convocan una reunión, a la que se presentan unas 60 personas. Así nace la PAH.

El grupo impulsor no quería crear una oficina donde proporcionar asistencia a la gente afectada, sino movilizarla, que conocieran sus derechos y lucharan por ellos. La realidad, sin embargo, era otra: “Esperábamos encontrarnos a mucha gente enfadada porque había habido una estafa, un engaño masivo por parte del Gobierno, de los bancos, pero



Foto: Joan Luzzatti

nos encontramos a gente devastada. No podían ni hablar. Sentían culpa, vergüenza”, explicaba Ada Colau, su entonces portavoz, cuando la PAH cumplía cinco años. El apoyo legal e informativo fue importante, pero la ocasión de encontrarse con personas con experiencias parecidas tuvo un efecto de reconocimiento, de empoderamiento, decisivo en el recorrido de la Plataforma. Esta terapéutica recuperación de los afectados a activistas, que se informaran a fondo y pasaran a la acción. “¿Quién va a defender tu caso mejor que tú mismo?”, se preguntaba Ada en una entrevista. “Ni el mejor de los abogados. Esa es una de las claves del éxito de la plataforma”. A partir de ahí se fue expandiendo, y las personas afectadas empezaron a crear plataformas en sus localidades. En febrero de 2014, cuando se cumplía el quinto aniversario, contabilizaban 200 PAH en todo el Estado, y no paran de crecer.

En 2010, ponen en marcha la campaña “Stop Desahucios”, que ini-

cia la vida pública de la PAH. El 3 de noviembre, unos 30 miembros acuden a la Bisbal, un pueblo del Penedès, para intentar impedir el desahucio de Lluís Martí, un mecánico en la cincuentena con un hijo de nueve años su cargo, sin trabajo y con una prestación social de solo 426 euros que debía unos 100.000 euros a Catalunya Caixa. El desahucio se paró el primer día y, tras varios intentos posteriores, fue suspendido de forma indefinida. Era la primera victoria pública de la Plataforma, seguida de muchas más en Cataluña.

El año siguiente, impulsa una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se admitiera que los hipotecados dieran la vivienda a los bancos como pago por el resto de la deuda; lo que se conoce como dación en pago. El procedimiento de la Iniciativa Popular, regulado por una ley orgánica de 1984, permite que la propuesta de unos ciudadanos sea considerada por el Congreso de los Diputados, para lo que se necesitan al menos 500.000 firmas.

Foto: Fotomovimiento



Foto: Imagen en Acción





Foto: Fotomovimiento

La Plataforma consiguió 1.402.854. La ILP entra en el Congreso, pero la mayoría absoluta la descaféina y desnaturaliza. No obstante, resultó un paso decisivo para que cale en la ciudadanía el alcance y las causas del problema.

A principios de mayo, la PAH había paralizado 1.135 desahucios y realojado a casi 1.200 personas. Con motivo del quinto aniversario, hacía balance: “Miles de daciones en pago, condonaciones y alquileres sociales conseguidos en estos años, conquistados con gran esfuerzo, batallando caso a caso, se-

mana tras semana, gracias a miles de heroínas y héroes anónimos que se dejan la piel en este movimiento. (...) El respaldo de la opinión pública. Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago y el alquiler social que recogió un millón y medio de firmas. El apoyo de los jueces, del Parlamento Europeo y hasta de Naciones Unidas. Nuestra denuncia ha llegado a la prensa internacional, desde el *New York Times* o la BBC hasta Al Jazeera, pasando por Japón, Rusia o Finlandia”. Como ellos mismos reconocen, “cosas que hace cinco años nos decían que eran imposibles”.

Las claves de estos logros, según la Plataforma, son:

1. Crear espacios de experiencia compartida donde las personas asuman por sí mismas que sus problemas no son cuestiones individuales sino colectivas.
2. El enfoque de derechos: se están vulnerando los derechos de todas y todos nosotros, y el Estado está incumpliendo sus compromisos y obligaciones al permitir, o incluso ser cómplice, de la vulneración sistemática de derechos humanos.



Foto: Imagen en Acción

3. Generar empoderamiento a través de herramientas que capaciten a la gente, de manera que podamos defendernos por nosotros mismos, sin tener que delegar en nadie.
4. Solidaridad y apoyo mutuo, de forma que nunca nadie más se sienta sola/o.

5. La PAH es un dispositivo sencillo y fácil de replicar, con muy pocos requisitos: asambleario, partidista e independiente, gratuito y pacífico. Quien quiera formar una PAH, tiene todos los materiales necesarios en la web.
6. Una apuesta por la comunicación, en el sentido más amplio. La PAH quiere ser un instrumento real para la mayoría social afectada por la estafa hipotecaria, por lo que habla el lenguaje de la gente y usa todos los medios posibles para comunicar, ya sean tradicionales o alternativos, así como las nuevas redes sociales.
7. Una estrategia compleja, que articule objetivos a corto, medio y largo plazo, así como múltiples niveles: interpelación a las Administraciones, acciones judiciales, incidencia internacional, acción directa y desobediencia civil como mecanismo de autotutela de los derechos vulnerados.

El problema de la vivienda no se ha resuelto; el proceso continúa, pero la experiencia de este movimiento muestra, a pesar del acoso y de los intentos de desprestigio, que “sí se puede: que somos mayoría y, si nos organizamos, tenemos mucho más poder del que nos habían hecho creer”.



afectadosporlahipoteca.com



Para saber más...

(sigue en la página siguiente)

Informes

- **Tanto tienes, ¿tanto pagas?** Informe Oxfam Intermón nº 35 www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/TantoTienesTantoPagas.pdf
- **Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica.** Informe Oxfam <http://opcions.org/es/revista>
- **Crisis, desigualdad y pobreza.** Informe Oxfam Intermón nº 32 www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/Informe_IO_Crisis_desigualdad_y_pobreza_300113.pdf
- **El coste humano de la austeridad: la gente pobre paga por una crisis que no causó.** Informe de Cáritas Europa www.caritas.eu/the-human-cost-of-austerity-poor-people-paying-for-a-crisis-they-did-not-cause
- **Exclusión y desarrollo social.** Informe de Cáritas Europa www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/4314/EXCLUSION%20Y%20DESARROLLO%20SOCIAL.%20Versi%C3%B3n%20digital.pdf

Libros

- **La economía desenmascarada. Del poder y la codicia a la compasión y el bien común.** Manfred Max-Neef y Philip B. Smith. Icaria, 2014.
- **Contra la crisis, otra economía y otro modo de vivir.** Juan Torres López. Ediciones HOAC. Madrid, 2011.
- **Tipos infames. Los políticos, banqueros y empresarios que se están forrando con la crisis.** Carlos Fonseca. Temas de Hoy. Madrid, 2014.
- **Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España.** Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón. Prólogo de Noam Chomsky. Sequitur, 2011. (www.attac.es/uploads/Hay-alternativas-web.pdf)

Global express pretende generar preguntas entre los alumnos y las alumnas sobre lo que cuentan los medios de comunicación. Se trata de promover una visión crítica de la realidad, que les permita comprender el estado del mundo y, en especial, la situación del mundo en desarrollo.

Dossier informativo: **Araceli Caballero**

Actividades y guía didáctica: **Israel García, Marga Florensa, Quique Porcar, Jordi Sant, Anna Duch y Begoña Carmona**

Diseño y edición: **Estudi Lluís Torres**

Ilustraciones: **Xavier Gàndara, Peix**

Corrección lingüística: **Albert Nolla**

Coordinación: **Anna Duch**



Para saber más...

(viene de la página anterior)

Artículos

- **“Lo que no se dice sobre el crecimiento de las desigualdades sociales”.** Vicenç Navarro. *Público*, 27 febrero 2014
<http://blogs.publico.es/dominiopublico/9270/lo-que-no-se-dice-sobre-el-crecimiento-de-las-desigualdades-sociales/>
- **“El dramático deterioro de la España y la Europa social”.** Vicenç Navarro. *Público*, 3 abril 2014
blogs.publico.es/dominiopublico/9605/

Folletos

- **“Cambio de época, ¿cambio de rumbo? Aportaciones y propuestas desde los movimientos sociales”.** Óscar Mateos y Jesús Sanz. *Cuadernos CiJ* n° 186
- **Papeles CiJ**
(www.cristianismeijusticia.net/papers):
 - “Crónica de una crisis anunciada” n° 191
 - “Hacia dónde va la democracia?” n° 215
 - “Hacia un nuevo contrato social” n° 217
 - “El negocio de la salud” n° 219

Audiovisuales

- **La doctrina del shock.** Naomi Klein, 2009
www.youtube.com/watch?v=Nt44ivC9rg
- **El capital.** Constantin Costa-Gavras, 2012
- **El reto de gobernar entre vecinos**
proyectofigaro.wordpress.com

Páginas web

- **Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales**
www.ohchr.org/SP/Issues/ESCR/Pages/ESCRIndex.aspx
- **¿Dónde van mis impuestos?**
dondevanmisimpuestos.es
- **Plataforma de Afectados por la Hipoteca**
afectadosporlahipoteca.com
- **Marea Verde**
mareaverdemadrid.blogspot.com.es
- **Marea Blanca**
www.rebelmouse.com/MareaBlanca
- **Renta básica** www.redrentabasica.org
- **[des]Banka** desbanka.org
- **Presupuestos participativos**
www.presupuestosparticipativos.com
- **Democracia real ¡ya!** www.democraciarealya.es

¡Visita nuestra web y
descárgate el Global express!

www.kaidara.org



OXFAM Intermón

n. 20 Derechos sociales
n. 19 Sistema alimentario
n. 18 Revueltas sociales
n. 17 Crisis económica global
n. 16 Cumbre de Copenhague
n. 15 Agrocombustibles
n. 14 Consumo
n. 13 Turismo
n. 12 Petróleo
n. 11 Pobreza

n. 10 Cambio climático
n. 09 Emergencia y solidaridad
n. 08 Juegos Olímpicos
n. 07 Democracia
n. 06 Armamentismo
n. 05 África y sequía
n. 04 Irak
n. 03 Cumbre de la Tierra
n. 02 Argentina en crisis
n. 01 Afganistán